

## FIJACIÓN DE CUOTA DE ALIMENTO PARA LOS PADRES<sup>1</sup>

### FOOD FEE SETTING FOR PARENTS

OMaida CUETO BARRAGAN<sup>2</sup>

Universidad libre Santo Tomas

[Omacueto-abogados@hotmail.com](mailto:Omacueto-abogados@hotmail.com)

MARIA GABRIELA AVELLANEDA ESPINOSA<sup>3</sup>

Universidad Antonio Nariño

[Mariagaby20101@hotmail.com](mailto:Mariagaby20101@hotmail.com)

### RESUMEN

En Colombia, el abandono de los padres mayores se hace cada vez más evidente en la sociedad colombiana, los padres mayores en situación de necesidad y abandono, tanto moral, físico, emocional, lleva a que este ser humano se sienta desprotegido, complicando su situación a nivel económico social y familiar sometiéndolo a no tener vivencias amables, por la situación en que se encuentra por falta de apoyo, de la familia y acompañamiento, trasladando al Estado la obligación de suplir estas necesidades a través de centros de atención social del Estado encargados del cuidado de los adultos mayores (centros vida). La primera obligación de los hijos

---

<sup>1</sup> Artículo de revisión para optar al título de Especialista en Derecho de Familia de la Universidad Libre Seccional Socorro

<sup>2</sup> Abogada Universidad Santo Tomas de Aquino, Estudiante especialización Familia Universidad Libre del Socorro

<sup>3</sup> Abogada Universidad Antonio Nariño, Estudiante especialización Familia Universidad Libre del Socorro

adultos en el núcleo familiar es garantizar los alimentos al padre en estado de necesidad y abandono, para que tengan un nivel de vida adecuado y digno.

Se volvió costumbre ver en los noticieros, en los periódicos, en las calles, autores, la experiencia laboral y el día a día, que nos informan los casos de adultos mayores abandonados a su suerte teniendo familias y habiendo utilizado toda su fuerza laboral para prodigar a su familia hasta la edad productiva, igual cuando sus padres quedan solos a consecuencia de la pérdida de su cónyuge o compañera y/o compañero permanente. Los estudios socioeconómicos nos advierten que cada día la tendencia de la población es a aumentar la población adulta mayor. El estado colombiano en su esencia de Estado Social de Derecho, fundado en el principio de solidaridad y en defensa del ser humano y en su obligación de proteger a la familia como núcleo fundamental de la sociedad, buscando proteger a la población adulta mayor como componente importante de la familia, pero sesgando esta atención a los estratos 1 y 2, dejando por fuera a los estratos 3,4,5,6 sometiéndolos a lo que podríamos llamar “EL ABANDONO Y LA MUERTE SILENCIOSA HOY POBREZA OCULTA”. Porque si bien, existe la norma sustancial y los mecanismos para su cumplimiento no son de fácil acceso para los adultos mayores en razón de la falta de conocimiento que tienen los interesados, todas las dificultades que se sufren en esa etapa de la vida ; falta de locomoción, enfermedades crónicas, estados depresivo, faltas afectivas, abandono del núcleo familiar, violencia familiar, difícil acceso a la información, escases de dinero o imposibilidad para administrarlo para cubrir sus necesidades primarias.

La protección de los padres en estado de necesidad y abandono por los hijos es letra muerta en el ordenamiento jurídico colombiano, debe determinarse el cumplimiento de estas normas en el principio fundamental de solidaridad; por medio del cual se ha buscado evitar que se conviertan en víctimas del estado de abandono de sus derechos fundamentales, como alimentos conforme al art 411 Nral 2do los ascendientes de conformidad al Código Civil Colombiano y demás normas concordantes.

Por consiguiente, el presente artículo de revisión, pretende que otras voces acudan en el llamado de atender las necesidades de una población que también es vulnerable como es la de los padres, adultos mayores, en estado de necesidad, abandonados por sus hijos y sin garantía de acceso a la normatividad protectora Constitucional que de soluciones a su condición de abandono. Teniendo en cuenta la defensa de los derechos de quienes no tienen voz, en el cumplimiento de la protección de los derechos de padres ancianos en estado de abandono por parte de sus hijos, para fijarse una cuota de alimentos mínima producto del aporte proporcional de todos sus hijos, para aquellos padres, afectados emocionalmente y sin que las autoridades determinen procedimientos claros y ágiles en protección de la defensa de los derechos fundamentales a tener una familia, a que el estado la sociedad y la familia sean solidarios con estos padres ancianos, necesitados y desprotegidos por su familia en Colombia.

**Palabras clave:** Cuota alimentos, Estado de Necesidad de padres, derechos fundamentales, familia, vida digna.

## ABSTRACT

In Colombia, the abandonment of older parents is increasingly evident in Colombian society, older parents in need and abandonment, both moral, physical, emotional, leads to this human being feeling unprotected, complicating their situation at the economic, social and family level, subjecting it to not having kind experiences, due to the situation in which it finds itself due to lack of support, family and accompaniment, transferring to the state the obligation to supply these needs through state social care centers in charge for the care of older adults (life centers). The first obligation of adult children in the family nucleus is to guarantee food to the father in a state of need and abandonment, so that they have an adequate and dignified standard of living. It became customary to see in the news, in the newspapers, authors, the work experience and the day to day, that we report the cases of older adults abandoned to their fate having families and having used their entire workforce to lavish their family until the productive age, the same when their parents are left alone as a result of the loss of their spouse or partner and / or permanent partner. Socioeconomic studies warn us that every day the population's tendency is to increase the older adult population. The Colombian state in its essence of social state of law, founded on the principle of solidarity and in defense of the human being and on its obligation to protect the family as the fundamental nucleus of society, seeking to protect the elderly population as important component of the family, but biasing this attention to strata 1 and 2, leaving out strata 3,4,5,6 subjecting them to what we could call "THE ABANDONMENT AND SILENT DEATH". Because although there is a substantial norm and the mechanisms for its compliance are not easily accessible for older adults due to the lack of knowledge of the interested parties,

all the difficulties experienced at that stage; lack of locomotion, chronic illnesses, depressive states, emotional deficiencies, abandonment of the family nucleus, family violence, difficult access to information, lack of money or inability to manage it to cover their primary needs.

The protection of parents in a state of need and abandonment by children is a dead letter in the Colombian legal system, compliance with these rules must be determined in the fundamental principle of solidarity; by means of which it has been sought to prevent them from becoming victims of the state of abandonment of their fundamental rights, such as maintenance pursuant to art 411 Nral 2do the ascendants determined in the Civil Code and other concordant norms. Therefore, the present review article tries that other voices come in the call to attend to the needs of a population that is also vulnerable, such as parents, older adults, in need, abandoned by their children and without guarantee of access to the constitutional protective regulations that provide solutions to their condition of abandonment. Taking into account the defense of the rights of those who have no voice, in compliance with the protection of the rights of elderly parents in a state of abandonment by their children, to set a minimum food quota as a result of the proportional contribution of all their children, for those parents, emotionally affected and without the authorities determining clear and agile procedures in protection of the defense of the fundamental rights to have a family, that the state, society and family are in solidarity with elderly, needy and unprotected by his family in Colombia.

**Keywords:** Food quota, State of Need of parents, fundamental rights, family, decent life.

## INTRODUCCION

La Constitución Política de 1991, conforme al artículo 42 protege a la familia como el núcleo esencial de la sociedad; el cual debe ser protegido por el sistema jurídico en todos sus niveles; es de suma importancia destacar la expedición de la Ley 687 de 2001, donde se crean los Centros de Vida para la tercera edad como lugares de protección y abrigo para proteger los derechos determinados en los Art 411, 416 C.C, 397 C.G.P donde se faculta a los entes encargados de administrar justicia tramitar y hacer cumplir la obligación de alimentos a favor de los padres por parte de los hijos de forma general bajo la denominación procesal de “ALIMENTOS A FAVOR DEL MAYOR DE EDAD “.

Por tanto, es importante determinar: ¿existen garantías por parte del estado para que los padres tengan una vida digna junto a su familia y no sean sometidos a estado de necesidad y abandono? La revisión realizada a la secuencia de la normativa en referencia a la protección de la familia implícita la condición de padre, adulto mayor en condición de necesidad y abandono de sus hijos, nos permite afirmar que en la legislación Colombiana existe abundancia de normas que protegen los derechos de los padres ancianos en estado de necesidad y abandono , partiendo de una cuota de alimentos que le permita cubrir sus necesidades sin limitaciones en el tiempo de la obligación frente a sus hijos.

Para resolver el problema de la fijación de cuotas de alimentos de los padres es importante abordar y revisar los temas de investigación relativos a la familia, protección de los padres, la filiación, la atención del adulto mayor, los principios fundamentales de

solidaria, Estado Social de Derecho, respeto a la dignidad humana y más aún, cuando se están expuestos a observar el comportamiento inadecuado de sus hijos.

En Colombia, existe una ley que protege los alimentos a favor de los padres como ascendientes en la filiación , artículo 411 del código civil Colombiano numerales 3 y 8, en el concepto de familia artículo 42 Constitución Nacional, para aquellos padres mayores, que no aportaron pensión en razón a que sus ingresos salariales, no fueron constantes para afiliarse a un sistema de pensión y se encuentra en un estado de vulnerabilidad, para satisfacer sus necesidades primarias que le permitan subsistir en condiciones dignas, llegado a la edad en que no pueda producir su auto subsistencia. El mismo código civil en los artículos 250 inciso 2do, 251 establece obligaciones para con los padres, aun después de emancipados los hijos, la obligación de cuidar de los padres en su ancianidad, estado de demencia y en todas las circunstancias de la vida que necesite su auxilio en concordancia con el artículo 411 y 1025 del código civil colombiano. Fundamentados en la revisión de las normas que protegen como derecho fundamental a la conformación de una familia.

En el concepto de protección de la familia, el desarrollo normativo se ha concentrado específicamente en los hijos, niña, niño y los adolescentes, dejando de lado los otros componentes de la familia; padres, abuelos, tíos en general ascendientes y descendientes y colaterales del tronco familiar. La protección se debe dar por igual a todos los componentes de la familia y en lo que respecta a los alimentos el artículo 411 de código civil colombiano los relaciona, clasificación dentro de la que esta inmersos los padres. Razón en la que fundamentamos la obligación del Estado Colombiano en hacer cumplir las normas y los tratados internacionales que hacen

parte del bloque de constitucionalidad en procura de la protección de fijar una cuota de alimentos para aquellos padres que en su etapa de ancianidad no teniendo como garantizar su propia subsistencia, deben ser auxiliados por sus hijos de forma voluntaria y que cuando el amparo de su familia en cabeza de sus hijos no se manifiesta ante la necesidad, sea el Estado en su poder coercitivo quien a través de sus instituciones Nacionales, regionales y municipales de tipo administrativas ejerzan la competencia y autoridad para adelantar los trámites jurídicos administrativos que para el caso en Colombia está en cabeza del INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR como el ente encargado de cumplir las funciones de PROTECTOR DE LA FAMILIA, delegando en los DEFENSORES DE FAMILIA Y COMISARIOS DE FAMILIA, facultados mediante las diferentes normas, hoy vigentes la ley 1850 de julio 19 de 2017 específicamente en el artículo 9 que adiciona el artículo 34ª a la ley 1251 del 2008, acompañados de tratados internacionales, Constitución Nacional están determinados para hacer cumplir la fijación de cuota de alimento de los padres. De la revisión normativa podemos afirmar que las autoridades han sesgado el cumplimiento de la norma frente a la FAMILIA, volcándose la atención a los menores de edad, niños, niñas y adolescentes, y dejando de lado el cumplimiento para los padres y demás miembros de la familia, especialmente padres ancianos en estado de necesidad y abandono, afirmación que se puede constatar en la literalidad de los

Artículos 82 FUNCIONES DEL DEFENSOR DE FAMILIA CORRESPONDE AL DEFENSOR DE FAMILIA: Numeral 8. Promover la conciliación extrajudicial en los asuntos relacionados con derechos y obligaciones entre conyugues, compañeros permanentes, padres e hijos, miembros de la familia, o personas



responsables del cuidado del niño, niña o adolescente. Numeral 13. Fijar cuota provisional de alimentos, siempre que no se logre conciliación. Numeral 18. Asesorar y orientar al público en materia de derechos de la infancia, adolescencia y familia.

Artículo 83. Comisarías de familia. Son entidades distritales o municipales o intermunicipales de carácter administrativo e interdisciplinario, que forma parte del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, cuya misión es prevenir, garantizar, restablecer y reparar los derechos de los miembros de la familia conculcados por situaciones de violencia intrafamiliar y demás establecidos por la ley. El Instituto de Bienestar Familiar será encargado de dictar la línea técnica a las comisarías de Familia en todo el país.

Artículo 86. Funciones del Comisario de Familia. Corresponde al Comisario de Familia: 1. Garantizar, proteger, restablecer y reparar los derechos de los miembros de la familia conculcados por situaciones de violencia intrafamiliar. 2. Atender y orientar a los niños, las niñas y los adolescentes y demás miembros del grupo familiar en el ejercicio y restablecimiento de sus derechos. 9. Aplicar medidas policivas que correspondan en casos de conflictos familiares, conforme a las atribuciones que les confieran los concejos municipales (Código Infancia y Adolescencia-ley 1098 de noviembre 8 de 2006).

Visto desde este punto los DEFENSORES DE FAMILIA y COMISARIOS DE FAMILIA en representación del Estado Colombiano y en tutela de las obligaciones del Estado frente a la protección de la familia y analógicamente “los padres como miembros de la familia” en defensa del derecho fundamental de filiación y en su

condición de mayores adultos y asumiendo la competencia y jurisdicción como esta manifiesto en el estatuto del DEFENSOR DE FAMILIA (Resolución No. 0652 de 2011 del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar), el Artículo 9 de la ley 1850 del 19 de julio de 2017 que modifica el artículo 34ª de la ley 1251 del 2008 que impone esta competencia a los Comisarios de Familia y a los Defensores de Familia, por lo que están obligados a la defensa de los padres-adultos mayores que en su ancianidad y abandonados requieren la fijación de una cuota de alimentos para su subsistencia.

### **¿LA DEFENSA DE LOS INTERESES DE LOS PADRES ABANDONADOS ES OBLIGACIÓN DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS?**

El Gobierno Nacional en cumplimiento de sus funciones administrativas, está obligado a buscar la satisfacción de las necesidades generales de todos los habitantes, conforme a los principios, finalidades y cometidos consagrados en la Constitución Política, especialmente a defender los intereses de la familia, como núcleo fundamental de la sociedad, traducido en defensa de los padres, hijos, y todo el grupo de personas vinculados por el parentesco. Por vinculo sanguíneo o por vinculo constituido, y reconocido legal y socialmente. La calidad de padre está inmersa en la composición de la familia que tiene como fuerza vinculante la filiación, como derecho fundamental de donde se originan, derechos y obligaciones que el Estado debe vigilar su cumplimiento bajo la guarda de la Constitución, las normas, la jurisprudencia y la doctrina revestidos de la jurisdicción y competencia que para el caso de protección del Bienestar de la familia fue trasladada al INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR como ente coordinador del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, quien tiene la autonomía para actuar en defensa del bienestar de la Familia

y a su vez el ICBF traslada esa competencia y jurisdicción a los DEFENSORES DE FAMILIA y a los COMISARIOS DE FAMILIA, revistiéndolos de los principios de Coordinación, Concurrencia y Subsidiaridad consagrados en la Constitución Nacional art 288, como autoridades administrativas de naturaleza multidisciplinaria, encargadas de garantizar, la prevención, protección, garantía y restablecimiento de los derechos, de los niños, niñas y adolescentes, y los demás miembros de la familia determinadas en la ley 1098 de 2006 Código de Infancia y Adolescencia , las cuales se concretan en actuaciones administrativas y de policía que les corresponden como integrantes del I.C.B.F, y en acciones judiciales, administrativas y civiles. En desarrollo de lo anterior, se ha elaborado la obra "Estatuto del Defensor de Familia" con sus anexos "Manual del Defensor de Familia" e "Índice Normativo", como un compendio normativo de carácter jurídico que recoge los principales temas que informan la labor de los Defensores de Familia y sus equipos interdisciplinarios.

La Constitución Política, como garante de que el principio fundamental de Solidaridad este implícito en todas las actuaciones de los ciudadanos y principalmente del Estado Colombiano y de que en desarrollo del mismo se cobije la Protección a la Dignidad Humana de los padres abandonados y necesitados de alimento, consagra un favorecimiento especial para aquellos padres que en calidad de adultos mayores catalogados como población vulnerable en la medida que no pueden subsistir por si mismos por lo cual necesitan, una atencion preferente del Estado , de la familia y de la sociedad ,evidenciado en las normas de rango Constitucional , en los tratados y pactos de Derecho internacional . En lo Constitucional podemos resaltar lo dispuesto por el artículo 46 que determina:

El Estado, la sociedad y la familia concurrirán para la protección y la asistencia de las personas de la tercera edad y promoverán su integración a la vida activa y comunitaria. El Estado les garantizará los servicios de la seguridad social integral y el subsidio alimentario en caso de indigencia (Constitución Nacional, 1991).

En cuanto a los tratados internacionales de derechos humanos que hacen parte del bloque de constitucionalidad que consagran la protección preferente a los adultos mayores, puede mencionarse el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Es el Protocolo de San Salvador, que en su artículo 17 señala:

Protección de los ancianos. Toda persona tiene derecho a protección especial durante su ancianidad. En tal cometido, los Estados Partes se comprometen a adoptar de manera progresiva las medidas necesarias a fin de llevar este derecho a la práctica y en particular a: a) Proporcionar instalaciones adecuadas, así como alimentación y atención médica especializada a las personas de edad avanzada que carezcan de ella y no se encuentren en condiciones de proporcionárselas por sí mismas; b) Ejecutar programas laborales específicos destinados a conceder a los ancianos la posibilidad de realizar una actividad productiva adecuada a sus capacidades respetando su vocación o deseos; c) Estimular la formación de organizaciones sociales destinadas a mejorarla calidad de

vida de los ancianos (protocolo de san salvador 23 de diciembre de 1997).

Así mismo, en el desarrollo jurisprudencial hay varios pronunciamientos sobre el particular y es así como se hace necesario el cumplimiento de este principio de solidaridad que impone el ejercicio de “deberes fundamentales” (Corte Constitucional en sentencia T-025/15), al poder público y a la sociedad para la satisfacción plena de los derechos. Dichos deberes se deben reforzar en tratándose de asegurar a las personas de la tercera edad (mayores adultos) la protección de todas las situaciones que comprometan sus garantías fundamentales en calidad de ciudadanos adultos mayores en estado de necesidad y abandono de su familia (hijos), para ello el constituyente involucró en su consecución a la familia (hijos), en primera medida y, subsidiariamente al Estado y la sociedad en su conjunto.

Igualmente, se ha pronunciado en del derecho de alimentos:

El derecho de alimentos es aquel que le asiste a una persona para reclamar de la persona obligada legalmente a darlos, lo necesario para su subsistencia, cuando no está en capacidad de procurárselo por sus propios medios. Así la obligación alimentaria está en cabeza de quien, por ley, debe sacrificar parte de su propiedad con el fin de garantizar la supervivencia y desarrollo del acreedor de alimentos (Sentencia C-919 Corte Constitucional, 2001 Magistrado ponente Honorable Magistrado Jaime Araujo Rentería).

Así el derecho de alimentos se deriva sin lugar a dudas del vínculo familiar y es una obligación que tiene fundamento en el principio de la solidaridad, con la premisa de que el alimentario no está en la capacidad de asegurarse su propia subsistencia y el deber de asistencia alimentaria, se determina sobre dos requisitos fundamentales: 1) La necesidad del beneficiario. 2) La capacidad del deudor, quien debe ayudar a la subsistencia de sus parientes, sin que ello implique el sacrificio de su propia existencia.

Al respecto de alimentos el artículo 411 del Código Civil señala que se deben alimentos: "(...) 3o) A los ascendientes. (...) ". A diferencia de los menores alimentarios la ley no establece edad límite para la obligación alimentaria de los ascendientes, pero en el artículo 422 del C.C. se establecen dos excepciones, así: 1- Es el caso de la persona impedida físicamente para trabajar, lo cual también se encuentra establecido en la Constitución Política en su artículo 42. 2- La incapacidad económica, generada por la imposibilidad de ubicación laboral o retribución económica mínima, caso en el cual si el adolescente continúa con sus estudios es obligatorio seguir cumpliendo con la obligación alimentaria. Con todo lo expuesto es evidente que, el elemento esencial para extinguir la obligación alimentaria lo constituye la superación de las condiciones que dieron lugar a la solicitud o requerimiento de alimentos y que mientras no se presente esta circunstancia, el sentido de solidaridad humana y la existencia del parentesco y la filiación, no admiten barreras temporales para cesar la ayuda.

Específicamente, en lo atinente al derecho de recibir alimentos que tiene la población adulta mayor en el país, la Ley 1251 de 2008, en su artículo 34 A, modificado por la Ley 1850 de 2017, impone esta competencia a los Comisarios de Familia y a los

Defensores de Familia, por lo que están obligados a la defensa de los padres-adultos mayores que en su ancianidad y abandonados requieren la fijación de una cuota de alimentos para su subsistencia y señala:

DERECHO A LOS ALIMENTOS. Las personas adultas mayores tienen derecho a los alimentos y demás medios para su mantenimiento físico, psicológico, espiritual, moral, cultural y social. Serán proporcionados por quienes se encuentran obligados de acuerdo con la ley y su capacidad económica (Artículo 34 A ley 1850 del 19 de julio de 2017)

En este sentido también se ha pronunciado la Corte en Constitucional en varias oportunidades, señalando que:

Teniendo en cuenta lo visto, las obligaciones alimentarias se predicen no solo de padres a favor de hijos menores o mayores impedidos para trabajar por motivos de estudio o que sean incapaces física o mentalmente, sino también de los hijos con capacidad económica a favor de sus padres que no se encuentran en condiciones para sostenerse económicamente por sus propios medios, sobre todo cuando éstos son adultos mayores y sus expectativas de trabajo son casi nulas. Cuando se trata de los adultos mayores y esta obligación no se cumple, la ley los faculta para exigir de sus descendientes en primer orden a sus hijos, el suministro periódico de una cuota alimentaria para su sostenimiento básico que satisfaga su mínimo vital, para lo cual, pueden acudir a los estrados judiciales o a un centro de conciliación, para obtener la satisfacción de sus peticiones. (Corte Constitucional, sentencia T-685 de 2014- Magistrado Ponente JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB).

Esta Ley 1850 de julio 19 de 2017, por la cual se establecieron nuevas medidas para la protección del adulto mayor, confirmó el derecho que les asiste a los adultos mayores para ser beneficiarios de una cuota alimentarias en caso de necesidad y ratificó la competencia a las COMISARIAS DE FAMILIA Y DEFENSORIAS DE FAMILIA para asumir los casos de incumplimiento de las obligaciones alimentarias en favor de los adultos mayores. Igualmente esta ley modificó las leyes 1251 de 2008, 1315 de 2009, 599 de 2000 y 1276 de 2009, penalizó el maltrato intrafamiliar por abandono y se dictó otras disposiciones, en el artículo 9 adiciona el artículo 34 A, a la ley 1251 de 2008, en el que dispuso lo siguiente:

Derecho a los Alimentos. Las personas adultas mayores tienen derecho a los alimentos y demás medios para su mantenimiento físico, psicológico, espiritual, moral, cultural y social. Serán proporcionados por quienes se encuentran obligados de acuerdo con la Ley y su capacidad económica. Corresponderá a los Comisarios de Familia respecto de las personas adultas mayores, en caso de no lograr la conciliación, fijar cuota provisional de alimentos. Cumplido este procedimiento el Comisario de familia deberá remitir el expediente a la Defensoría de Familia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, para que presente en nombre del adulto mayor la demanda de alimentos ante el Juez competente (Ley 1850, 19 de julio de 2017).

Debe asumir la causa conforme lo dispuesto por el artículo 397 del Código General del Proceso. Es muy importante resaltar también que la norma le impone de acuerdo con las disposiciones sobre el tema de alimentos, cuando el Defensor de Familia o el



Comisario de Familia conozcan de casos diferentes a los que son de su competencia, según lo señalado en las normas anteriores, los remitirán a la autoridad competente con el propósito de que: 1) adopten las medidas provisionales, de emergencia, protección o restablecimiento de derechos en favor de los adultos mayores. 2) gestionen lo pertinente a la atención con las entidades territoriales. En el evento en que un Comisario de Familia o un Defensor de Familia, no atienda las nuevas obligaciones que sobre la atención del adulto mayor, la ley contempla que estaría incurriendo en el incumplimiento de sus competencias y obligaciones, razón por la cual deberá ser investigado por el superior jerárquico que corresponda.

No hay temor a equivocarnos en afirmar que la ley 1850 del 19 de julio del 2017 en su desarrollo consagro de forma clara y diáfana la obligación de la defensa de los intereses de los adultos mayores en su derecho a que la autoridad competente fije una cuota de alimentos en favor del adulto necesitado y a que la autoridad administrativa en su obligación del cumplimiento de la Constitución Nacional y las normas con carácter de protección se le fije una cuota provisional de alimentos y dar traslado para iniciar la demanda de oficio ante el juez competente con el agravante que de no darse el trámite administrativo se genera para el servidor público una falta disciplinaria. .

## **EI DERECHO A UNA VIDA DIGNA COMO SUSTENTO AL DERECHO DE ALIMENTOS DEL PADRE.**

El Código Civil colombiano impone tanto a los padres como a los hijos, derechos y obligaciones legales.

Éstos deben a sus progenitores respecto, obediencia, trato digno y el debido cuidado y auxilio siempre que lo necesiten. Centrando nuestro estudio en esta última, el artículo 251 del Código Civil establece que, aunque el hijo alcance la mayoría de edad para obrar de forma independiente; siempre debe cuidar y brindar auxilio a sus padres en tres contextos determinados: “(i) en la ancianidad; (ii) en el estado de demencia; y en todas las circunstancias de la vida en las cuales requieran el socorro de los hijos.” Lo anterior no implica que esos tres contextos puedan ser los únicos en los cuales los hijos otorguen ayuda a los padres, ya que se deben tener como meramente enunciativos y no taxativos (Código Civil colombiano, 1887).

La protección a la dignidad humana en concurrencia con el principio de solidaridad debe consagrar un amparo especial para los padres abandonados, razón por la cual se encuentra en un estado que requiere una atención preferente del estado que ponga en marcha las disposiciones de rango Constitucional con carácter inmediato y sin dilaciones.

La solidaridad familiar de los hijos frente a los ascendientes directos también se ve reflejada en las normas que regulan el derecho de alimentos que aquellos deben a éstos, punto que se ubica dentro de los ítems del concepto de cuidado y auxilio. De forma puntual.

El artículo 411 del Código Civil establece que son titulares del derecho de alimentos los ascendientes matrimoniales, naturales y adoptivos. Con base en esa norma, la Corte ha reconocido que los alimentos legales tienen por

fundamento el principio de solidaridad, según el cual los miembros de la familia, tienen la obligación de suministrar la subsistencia a aquellos integrantes de la misma que no están en capacidad de asegurársela por sí mismos. Esto impone verificar la necesidad del alimentario o beneficiario y la capacidad económica del alimentante u obligado (Código Civil colombiano)

En la mayoría de los lugares ha perdido vigor la antigua familia extensa, la familia de la casa grande, patriarcal, en la que compartían naturalmente abuelos, padres e hijos, y a veces tíos y primos. Era casi obvio que las distintas generaciones compartieran vivienda, alimentación, recreación y conversación. Abuelos y nietos se cruzaban en los pasillos y habitaciones de la casa, y se transmitían de unos a otros, tradiciones, costumbres, inquietudes y problemas. El abuelo, el "adulto mayor, era figura importante en esa transmisión de cultura, y él se sentía importante; en la familia extensa había un sitio para él, y en ese sitio cumplía un rol que era irremplazable." En la sociedad actual no hay espacio para ese tipo de familia; esta se ha reducido al núcleo mínimo de padres e hijos. (Ruiz & Orozco, 2009, pg. 1-2).

Países Suramericanos como el Ecuador son ejemplo en su legislación de la Variadas disposiciones legales que regulan el Derecho de Alimentos, la ley en este aspecto, comienza identificando a los titulares del derecho, así el Código Civil ecuatoriano en su Art. 349, define a quienes se deben alimentos en general, entre ellos en cuarto lugar se menciona a los padres, mientras que la ley del anciano en el artículo 10, expresa que los ancianos abandonados recibirán ayuda obligatoria en los hogares de protección estatal mientras se resuelva la pensión de alimentos; y el artículo 11 de

la misma ley determina que en las reclamaciones alimenticias formuladas por los ancianos, el juez de la causa fijará una pensión, tomando en cuenta las reglas de la sana crítica, además complementa este artículo, diciendo que los hijos deben respeto y obediencia a sus progenitores, y deben asistirlos, de acuerdo a su edad y capacidad económica, especialmente en caso de enfermedad, durante la tercera edad y cuando adolezcan de una discapacidad que no les permita valerse por sí mismos, notándose que en el primer caso la obligación nace de los vínculos familiares y en el otro de la relación entre hijos y padres. Para los derechos de alimentos la ley determina la existencia de dos niveles de alimentos, los Congruos y los Necesarios (Huera, 2016).

En nuestra legislación “En el cuarto lugar de prelación se encuentra los ascendientes, pues se entiende que, si estos respondieron por sus descendientes durante su etapa de desarrollo, deban ser socorridos por ellos a la hora de carecer de recursos para vivir” (Domínguez, 2016).

Con respecto a la determinación de fijar una cuota de alimentos al padre en estado de necesidad, abandonado para satisfacer sus necesidades básicas la corte Constitucional en sentencia de tutela se ha pronunciado.

*La doctrina jurídica ha denominado como pensión o cuota alimentaria a la prestación económica que debe una persona a otra, con el fin de que satisfaga sus necesidades básicas. Tal obligación de manutención y asistencia puede ser impuesta por la ley, por una convención o por un testamento. Para su exigibilidad deben configurarse tres requisitos esenciales: (i) la necesidad del alimentario, (ii) la capacidad económica de alimentante y (ii) un título que sirva*

*de fuente a la relación (Corte Constitucional- Sentencia T 685 de 2014*

*Magistrado Ponente JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB).*

En reiteradas ocasiones, esta Corporación se ha pronunciado sobre casos en los que adultos mayores no tienen una pensión o algún ingreso económico ni la posibilidad de costearlo por sí solos, señalando que *“resulta importante la obligatoriedad”* que deben tener los descendientes o compañeros sentimentales para que asuman el costo de las necesidades básicas de ellos.

En ese sentido, la jurisprudencia, hizo especial énfasis en el cuidado que se le debe prestar a la población de la tercera edad, para lo cual señaló,

el nuevo Estado Social de Derecho ha procurado, entre otras cosas, prestar una especial protección a aquellos individuos que se encuentren en situaciones de desventaja, dadas sus condiciones físicas y mentales frente a los demás (...) Al adulto mayor no sólo se le debe un inmenso respeto, sino que se debe evitar su degradación y aniquilamiento como ser humano, toda vez que no se le da la oportunidad de seguir laborando y muchos de ellos no cumplen con los requisitos para obtener una pensión imposibilitándolos a llegar una vida digna ( Corte Constitucional, la sentencia T-169 de 1998 Magistrado Ponente Dr. FABIO MORON DIAZ).

La jurisprudencia ha sostenido que la obligación alimentaria nace del principio de solidaridad

la obligación alimentaria se fundamenta en el principio de solidaridad, según el cual los miembros de la familia tienen la obligación de suministrar la subsistencia a aquellos integrantes de la misma que no están en capacidad de asegurársela por sí mismos, aunque también puede provenir de una donación entre vivos, tal como lo establece el artículo 411 del Código Civil. Por esta razón, se ha señalado que dicho deber se ubica en forma primigenia en la familia, dentro de la cual cada miembro es obligado y beneficiario recíprocamente, atendiendo a razones de equidad (Sentencia C-919, 2002 Magistrado Ponente JAIME ARAUJO RENTERIA ).

Establecido en la norma esta que el estado colombiano es un estado social de derecho, obligado a proteger la dignidad humana como derecho fundamental, igualmente a los miembros de la familia como núcleo fundamental de la sociedad. El padre por el hecho de ser persona tiene derecho a ser protegidos.

### **OBLIGACION DE ALIMENTOS A LOS ASCENDIENTES**

Los hijos tienen dos obligaciones respecto a sus padres: a) el artículo 250 del decreto 2028 (Código civil colombiano, 1974) manifiesta que “Los hijos deben respeto y obediencia a sus padres”, esta obligación no termina sino con la muerte del hijo o de los padres; y b) el hijo debe socorrer a sus padres siempre que lo necesiten.

El artículo 251 del (Código civil colombiano, 1974) dice que

la emancipación dé al hijo, el derecho de obrar independientemente, queda siempre obligado a cuidar de los padres en su ancianidad, en el estado de demencia, y en todas las circunstancias de la vida en que necesiten sus auxilios”. El artículo 252 agrega que tienen derecho al mismo socorro todos los

demás ascendientes legítimos, en caso de inexistencia o de insuficiencia de los inmediatos descendientes (Marco Gerardo Monroy Cabra. Edición 2014).

En lo que hace referencia al orden de prelación respecto de los ascendientes deberían tener una correlación de primer orden con respecto a las obligaciones de los padres de criar, educar y establecer a sus hijos y que de conformidad a la ley 75 de 1.968 consideró como delito el hecho de que los padres y demás ascendientes se sustrajeran a las obligaciones de asistencia moral de cuidado y alimentos debidos a los hijos y demás descendientes legítimos. Así también, el hoy art 233 que tipifica el Delito de inasistencia alimentaria de los ascendientes Artículo 233, inasistencia alimentaria del Código penal colombiano y en la misma prelación los sanciona.

Como lo menciona Domínguez (2016) “En el cuarto lugar de prelación se encuentra los ascendientes, pues se entiende que, si estos respondieron por sus descendientes durante su etapa de desarrollo, deban ser socorridos por ellos a la hora de carecer de recursos para vivir”.

El Código Civil colombiano impone tanto a los padres como a los hijos, derechos y obligaciones legales. Éstos deben a sus progenitores respecto, obediencia, trato digno y el debido cuidado y auxilio siempre que lo necesiten. Centrando nuestro estudio en esta última, el artículo 251 del Código Civil establece que, aunque el hijo alcance la mayoría de edad para obrar de forma independiente, siempre debe cuidar y brindar auxilio a sus padres en tres contextos determinados: *(i)* en la ancianidad; *(ii)* en el estado de demencia; y *(iii)* en todas las circunstancias de la vida en las cuales requieran el socorro de los hijos (Corte Constitucional. -2016 Sentencia C-451. M.P Luis Ernesto Vargas Silva).

Lo anterior no implica que esos tres contextos puedan ser los únicos en los cuales los hijos otorguen ayuda a los padres, ya que se deben tener como meramente enunciativos y no taxativos. Entonces, a partir de lo anterior la Corte concluye que la obligación de cuidado y auxilio que los hijos deben a los padres y a los demás ascendientes en línea recta que se encuentren en estado de necesidad o de debilidad manifiesta, encuentra sustento originario en los principios de reciprocidad familiar y solidaridad familiar, así como en el deber moral y jurídico de brindarles la asistencia que requieran para sobrellevar una vida digna. Tal socorro incluye el deber de brindar alimentos legales.

## **ELEMENTOS DE LA OBLIGACION DE ALIMENTOS**

Para poder ejecutar la obligación alimentaria se hace obligatorio que exista la necesidad del padre probada: Esa necesidad que tiene el padre de alimentarse, es diferente a la necesidad especial que tiene el menor ya que para este, esa necesidad se parte de la PRESUNCIÓN ESPECIAL DE LA IMPOSIBILIDAD por lo que se aplican las normas especiales del Código de Infancia y Adolescencia – ley 1098 de Noviembre 8 del 2006, en el manejo de los alimentos para mayores no puede partirse de la presunción de su imposibilidad de manutención, pues claramente sería una inversión de la carga probatoria. A tal punto es cierto lo anterior, que el propio Código Civil, en su artículo 260, transmite este deber a los abuelos del alimentado en caso de carencia de recursos por parte de los padres, permitiéndonos reiterar la tesis de que el parentesco sigue siendo por excelencia la fuente de la obligación alimentaria.



Que el o los hijos alimentarios tengan capacidad: *la capacidad en que esté el demandado de suministrarlos.*

Que exista un lazo filial: La filiación como el vínculo biológico o adoptivo que identifica a una persona con sus descendientes o identifica con sus ascendientes y con los parientes colaterales.

En lo que respecta a la obligación de proporcionar asistencia alimentaria a los ascendientes la jurisprudencia se ha manifestado en el cumplimiento de requisitos como presupuesto para su cumplimiento.

El deber de asistencia alimentaria se establece sobre dos requisitos fundamentales: la necesidad del beneficiario y la capacidad del deudor, quien debe ayudar a la subsistencia de sus parientes, sin que ello implique el sacrificio de su propia existencia. (Libro de derecho de familia de Marco Gerardo Monroy Cabra).

El derecho de alimentos es un efecto del parental, la fuente de la obligación legal radicada en la solidaridad de la familia, las estrechas relaciones que deben reunir los miembros del mismo grupo familiar. La comunidad de afecciones y de intereses de toda especie que existe entre los miembros de la misma familia impone a estos la obligación estricta de suministrar su subsistencia a aquellos que no alcanzaron a asegurar por su propio trabajo personal.

La prestación de alimentos es naturalmente divisible en proporción a sus respectivas facultades y circunstancias domésticas; en ningún caso puede desestimarse como una obligación solidaria (Corte Constitucional Sentencia C-237, 1997 Magistrado Ponente Dr. Carlos Gaviria Díaz).

## CONCLUSIONES

Con el presente artículo pretendemos hacer un llamado a la comunidad en general, a los hijos, a las entidades administrativas específicamente los defensores y comisarios de familia que son los operadores de la política nacional de bienestar social y que en últimas tienen la obligación del estado, en procura de proteger los intereses de la familia y de los padres adultos mayores, No hay temor a equivocarnos en afirmar que la ley 1850 DE JULIO 19 del 2017 consagro de forma clara y diáfana la obligación de la defensa de los intereses de los adultos mayores, en su derecho a que la autoridad competente fije una cuota de alimentos en favor del adulto necesitado, y que la autoridad administrativa en su obligación del cumplimiento de la Constitución Nacional y las normas con carácter de protección se le fije una cuota provisional de alimentos y dar traslado al Instituto de Bienestar Familiar para que a través de los Defensores de Familia inicien en calidad de agente oficioso o de mandatario, la demanda de Alimentos ante el juez de competente, con el agravante que de no darse el trámite administrativo se genera para el servidor público una Falta Disciplinaria. .

La Constitución Nacional como garante del Derecho Fundamental de Filiación (parentesco) origen de la obligación de dar alimentos a los miembros de la familia bajo el principio Constitucional de solidaridad, por el cual los miembros de la familia tienen la obligación de suministrar la subsistencia a aquellos integrantes de la misma que no están en capacidad de asegurársela por sí mismos, igualmente esta obligación puede provenir de una donación entre vivos, como lo establece el artículo 411 numeral 10 del código civil, señalando que dicho deber está presente en forma primigenia en la familia, dentro de la cual cada miembro es obligado y es beneficiario recíprocamente

atendiendo las razones del principio de equidad en tanto que una de las obligaciones más importantes que se genera en el seno de la familia es la alimentaria. Así se ha decantado por vía jurisprudencial. Se traduce en la afirmación en que cada persona debe velar por su propia subsistencia y por la de aquellos a quienes la ley le obliga.

Que el Estado en ejercicio de su deber Constitucional de asistencia Subsidiaria está obligado a proteger el derecho alimentario de los padres adulto mayor necesitado, sin más requisitos que el cumplimiento del principio de solidaridad y la obligación de proteger la familia en el mismo derecho Fundamental de igualdad que tienen los hijos, niños, niñas y adolescentes frente al derecho del padre abandonado en estado de necesidad como adulto mayor.

Que en el concepto de familia del artículo 42 de la Constitución Nacional se reconoce de forma implícita la calidad de padre como miembro de ella; especialmente a los padres que decidieron construir una familia y respondieron por sus hijos hasta su emancipación y hoy están en estado de abandono. Se hace necesario que la autoridad administrativa cuya competencia está en los Comisarios de Familia y Defensores de Familia en cumplimiento de la defensa del ESTADO SOCIAL DE DERECHOS haga cumplir las normas vigentes de conformidad a los artículos 9,10 y 11 de la ley 1850 del 19 de julio de 2017 y las que estén en concordancia con la Constitución Nacional y demás normas vigentes en procura que la obligación legal de los descendientes (hijos) para aportar alimentos a sus padres se cumpla, con rigurosidad, haciendo seguimiento para el cumplimiento del derecho de los padres. Toda vez que el derecho de alimentos constituye por excelencia un derecho fundamental de toda persona, que

la ley y la jurisprudencia han entendido que se debe ubicar esta figura en claros escenarios de prevalencia, particularmente en cuanto a los padres abandonados en calidad de adulto mayor se refiere.

Afirmar que no existe razón, ni fundamento, para que la competencia de DEFENSOR DE FAMILIA y del COMISARIO DE FAMILIA como autoridades administrativas en representación del estado no se ejerza con todas las facultades de jurisdicción y competencia para representar a la familia y dentro de esta representación es obligatoria la representación de esos padre abandonados por sus hijos, padres que tienen el derecho de reclamar la fijación de cuota de alimentos para sus subsistencia, mínima vital . Sería incumplir los fines esenciales del Estado Social de Derecho.

Que es imperioso, manifestar que ante el Derecho fundamental de la supervivencia en conexión con el derecho a la vida sentados en la defensa del principio de solidaridad, sumado a la defensa de la dignidad humana, fundamento del estado de derecho acompañado del artículo 411 inciso 2 donde se determina a quien se deben alimentos, podemos afirmar sin temor a equivocaciones que las autoridades administrativas, DEFENSORES DE FAMILIA , COMISARIOS DE FAMILIA, JUECES DE LA REPUBLICA están en la obligación imperiosa de defender los intereses de los padres , en estado de necesidad , en solicitud de fijación de una cuota de alimentos para su subsistencia. La norma tiene una connotación amplia de protección no solo a los padres sino a la familia, ello implica descendientes, ascendientes y colaterales, identificados por la filiación como un derecho fundamental, que construye familia como núcleo fundamental de la sociedad, sin dar lugar a otras elucubraciones. pero además

la ley 1850 de 2017, contempla una revisión y modificación a las normas de protección al adulto mayor, que igualmente es una condición de atención prevalente y de fuerza Constitucional, que obliga una protección inmediata y eficaz dado su calidad de derecho fundamental.

La Autoridad administrativa de la defensa del BIENESTAR DE LA FAMILIA, trasladada por el Gobierno Nacional al Instituto de Bienestar Familiar y operada por las Defensorías de Familia y las Comisarías de Familia, han volcado todos los esfuerzos a los niños, niñas y adolescentes, sesgando la defensa igualitaria de los derechos de los demás miembros que conforman la familia y de esta forma fraccionando el principio constitucional de igualdad en la prestación del servicio público, creando paradigmas, que debemos ser capaces de equilibrar en el ejercicio de informar a las comunidades sociales y a los interesados, de quienes estén afectados, reclamen el derecho de acceso a la justicia promovida por el Estado en Defensa de los intereses de los menos favorecidos.

Entendemos que teniendo el conocimiento podemos empoderar a los padres abandonados en estado de necesidad, a la ciudadanía en general para que acudan a las defensorías de familia y de forma legítima u oficiosa con carácter subsidiario a los comisarios de familia, inspectores de policía y personeros para solicitar se fije cuota de alimentos a los padres abandonados por sus hijos en estado de necesidad y en calidad de adulto mayor. Bajo la premisa que es causal disciplinaria para el funcionario público la no atención de la solicitud del interesado o de un tercero oficioso. Toda vez que estamos frente al ejercicio de derechos constitucionales de protección de sujetos vulnerados.

La misión de la autoridad administrativa en cabeza de los DEFENSORES DE FAMILIA y LOS COMISARIOS DE FAMILIA frente a la condición del padre abandonado en estado de necesidad, adulto mayor es semejante a la que se cumple en la protección de los niños, niñas y adolescentes que se encuentra en la misma condición de vulnerabilidad. con la diferencia que el manejo de las políticas públicas de protección de los niños, niñas y adolescentes, en un grande porcentaje lo hace el estado a través del INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR y la protección del adulto mayor, implícito los padres abandonados en estado de necesidad y en condición de adulto mayor se está manejando de forma particular por medio de ancianatos e instituciones particulares que han categorizado el servicio y últimamente de forma regional y municipal mediante de los centros vida.

La ley 1850 del 19 de julio de 2017 que estableció medidas de protección específicas y claras para el adulto mayor y modifico la legislación existente aun el código penal en los delitos contra el adulto mayor, en cierto modo se limita al maltrato intrafamiliar, pero se convierte en letra muerta ya que los beneficiaros la desconocen y las defensorías y Comisaria de Familia están atiborradas atendiendo la defensa de los menores, niños y niñas y adolescentes. Igualmente, la sociedad ha perdido el respeto por los mayores y no son motivo de atención y prevalencia.

Conforme con las disposiciones de ley relacionadas, los Defensores de Familia, Comisarios de Familia y demás autoridades administrativas están obligados a cumplir una misión, en acatamiento a la preferente protección prevista para los adultos mayores, que teniendo conocimiento de casos diferentes que están fuera de su

competencia conforme a las normas citadas y los deberán remitir inmediatamente a la autoridad competente con el propósito que entre otros:

1 ) adopten las medidas provisionales, de emergencia, protección o restablecimiento de derechos en favor de los adultos mayores, y 2) gestionen lo pertinente a la atención con las entidades territoriales.

La solución no es “aumentar los centros vida” crememos que la solución es conjunta del Estado a través las autoridades administrativas defensores y comisarios de familia que cumplan la misión de proteger y representar, y cumpliendo con su competencia y exigiéndole al estado los instrumentos para hacer efectivo el cumplimiento de la norma, la sociedad y la familia (hijos) para que, en un esfuerzo conjunto, la sociedad y la familia contribuyan desde la obligación que los compromete.

La Constitución Política de 1991 por medio del artículo 42 ha identificado la familia como el núcleo esencial de la sociedad; el cual debe ser protegido por el sistema jurídico en todos sus niveles; en donde es de suma importancia destacar la expedición de la Ley. La Ley 687 de 2001 se crean los Centros de Vida para la tercera edad y Art 411, 416 C.C ART 397 C.G.P en donde se faculta a los entes encargados de administrar justicia para regular y hacer cumplir con la obligación de alimentos a favor de los padres por parte de los hijos.

Triste y penoso contemplar a las familias que, en la vejez, sus padres son olvidados y abandonados por los hijos. En algunos casos la situación es sumamente precaria, pues la anciana madre o el anciano padre, enfermos, necesitados económicamente, solo reciben la insensibilidad e indiferencia de los hijos en muchos casos con medios

muy suficientes por demás para vivir con gran solvencia y disfrutando de grandes lujos el hijo y su familia. Negándose a demostrar su amor de hijos olvidando los malos momentos pasados, si es que los ha habido. Aquí es donde se hace necesario que el estado cumpla la función de protección y repita contra los obligados conforme a los artículo 10 y 11 de la ley 1859 del 19 de julio de 2017.

En referencia al análisis en lo Constitucional los alimentos para los hijos, igual que para los y los padres se establecen en el mismo aspecto fundamental para la subsistencia del ser humano, de hecho, para cualquier ser viviente. Es garantía, obligación, dignidad, derecho y procura de la realización de las personas como tal. En los artículos 42 y s.s. refieren a ese derecho-deber, a partir de propender por la realización de la familia. La dignidad del ser humano pasa por el hecho mismo de recibir oportuna y adecuadamente los alimentos, ello en su sentido más amplio.

En referencia al análisis desde lo legal, los alimentos en el Código Civil, artículos 411, sobre la titularidad para pedir alimentos, para los padres ver los numerales 2º, 4º, 6º, 8º. Están determinados en la misma norma en el inciso 1 de los descendientes. En el Artículo 416, en cuanto a la prelación de los derechos, en la medida que no es posible pedir alimentos de manera arbitraria e indiscriminada. Los padres tienen mayores oportunidades de ser protegidos por la norma. Así mismo, el artículo 417 nos permite afirmar, que un plano de igualdad desde lo sustancial se comienza a regular en el derecho a alimentos provisionales, ello desde la presentación de la demanda, todo ello sin perjuicio de la fijación provisional de alimentos, a instancia de hacerse nugatoria la comparecencia del obligado a la audiencia de conciliación, por ejemplo, la



fijada por el defensor de familia, quien impondrá en consecuencia una cuota provisional, lo cual, por cierto, no es exclusiva en relación con derechos de los menores. En lo que el Artículo 422, respecto a la obligación alimentaria. Por tanto, se debe alimentos a los padres, ello se debe entender, durante toda la vida del alimentario (padre), de igual manera entonces, durante el resto de la vida en la que persista la necesidad alimentaria.

En referencia al análisis desde la conciliación como requisito de procedibilidad: La ley 640/01. La conciliación es forma auto compositiva de solución al conflicto. Se le entiende como una actuación de carácter sustancial, además, dispositiva del derecho en litigio. Pero cuando la ley la establece como requisito de procedibilidad, toma una forma que antecede lo procesal. Cuando se vaya a demandar alimentos en favor de los padres, por regla general se debe agotar dicho requisito, salvo cuando se dé una de las circunstancias de exclusión del requisito, por ejemplo, cuando se solicitarán medidas cautelares, o se den los presupuestos indicados en la Sentencia C-1195 de noviembre de 2001. El artículo 40 de la ley al numeral 2º obliga a la conciliación, tratándose de manera general de asuntos alimenticios. Así, cuando los padres, abuelos, bisabuelos, van a demandar a su descendencia en alimentos, por regla general deberán agotar el requisito, salvo las excepciones consagradas en el artículo 35 de la ley. La obligatoriedad de la conciliación como prerrequisito de procedibilidad limita el acceso a la justicia del adulto mayor, ya que depende de sus mismos demandados llevando a desarrollar manifestaciones de violencia intrafamiliar como respuesta a su actuación y no existe una jurisdicción especializada que imparta de manera inmediata una medida de prevención en la protección de restablecimiento de Derechos, como si existe para

los hijos menores no emancipados, esta justicia especializada que con la sola noticia del estado de abandono y de necesidad de oficio se adelante la investigación y se ponga en conocimiento del establecimiento de justicia, razón por la cual en general esta protección es letra muerta, por las dificultades de acceder a la justicia por parte de los padres en estado de necesidad.

La demanda la puede presentar después de que el comisario fije cuota de alimentos provisionales y da trámite al Defensor de Familia para que de oficio o por mandato del padre o madre, u otro ascendiente, puedan demandar directamente la fijación o la modificación de la cuota alimentaria ante el juez competente, el de familia en única instancia; en su defecto el juez civil municipal, o el promiscuo municipal en única instancia, si en el lugar no existe juez de familia. No es necesario en este proceso de alimentos la realización de la única audiencia, la señalada en el artículo 392 CGP, si vencido el término de traslado, el juez cuenta con el suficiente acervo probatorio para fallar por escrito. El artículo 397 CGP esencialmente regula aspectos puntuales del proceso de alimentos en favor del mayor de edad, entiéndase no solamente padres, sino demás ascendientes legitimados por activa.

Para el proceso ejecutivo, el título ejecutivo lo es por ejemplo, un acta de conciliación lograda de forma extrajudicial, se someterá a reparto, y como demandante y demandado son personas mayores de edad, el juez competente lo será el del domicilio del demandado, o de manera concurrente el juez del lugar de cumplimiento de la obligación, surgiendo un fuero concurrente a elección (artículo 28, numeral 1º, ello

en concordancia con el numeral 3º, si se da por el demandante la posibilidad de demostrar el lugar de cumplimiento de la obligación).

En lo estrictamente procedimental hoy no existe diferencia alguna en cuanto al trámite del ejecutivo, tratándose de ser en favor de mayores de edad o menores. En ambos casos, mayores o menores de edad, el proceso es el mismo, dado que el CGP, no tiene procedimientos diferenciados, como si los tenía el CPC, cuando reglaba que el ejecutivo de alimentos era por el ejecutivo de mínima cuantía. Hoy esa diferencia no existe. En el ejecutivo de alimentos, indistintamente el acreedor, el demandado solo podrá proponer la excepción de cumplimiento de la obligación.

No obstante, en cuanto a aplicación de factores de competencia, se debe saber que, si el proceso es en favor de los padres, se demanda bajo numerales 1º y 3º, artículo 28; en favor de menores, numeral 2º artículo 28 CGP. Los padres acuden directamente al proceso en causa propia, en la etapa 1ra de Conciliación con fundamento en el artículo 9 de la ley 1850 del 19 de julio de 2017 y 2da etapa ante la jurisdicción artículo 397 del Código General del Proceso Alimentos a favor del mayor de edad. Representados por el DEFENSOR DE FAMILIA como agente oficioso o como Mandatarios. El menor debe acudir por intermedio de su representante. En ambos ejecutivos, desde la demanda se podrá solicitar que desde ya se libre mandamiento de pago por las mesadas que se causen.

## REFERENCIAS

Código Civil Colombiano. (1887). Ley 57. Bogotá, Colombia: Legis.

Código de la infancia y la adolescencia. (2006). Ley 1098. Bogotá, Colombia: Unión LTDA.

Código General del Proceso. (2012). Ley 1564. Bogotá, Colombia: Leyer.

Constitución Política de Colombia. (1991). Bogotá, Colombia: Cupido.

Corte Constitucional de la Republica. (2016). Sentencia C 451. Bogotá, Colombia.

Corte Constitucional Sentencia C-237, 1997 Magistrado Ponente Dr. Carlos Gaviria Díaz

Corte Constitucional. (2001). Sentencia C-919. M.P. Jaime Araujo Rentería.

Corte Constitucional. (2016). Sentencia C-451. M.P Luis Ernesto Vargas Silva.

Corte Constitucional, sentencia T-685 de 2014 Magistrado Ponente JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB

Domínguez, L.A. (2016). Los alimentos. Medellín, Colombia: Librería Jurídica.

Huera Castro, D. E. (2016). *Los alimentos congruos en beneficio de los padres adultos mayores y el derecho a la vida digna* (tesis de maestría). Recuperado de <http://dspace.uniandes.edu.ec/bitstream/123456789/5333/1/TUAEXCOMMDC009-2016.pdf>

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. (2011). Estatuto del Defensor de Familia. Recuperado de <https://www.icbf.gov.co/>

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. (2011). Resolución No. 0652

Marco Gerardo **Monroy Cabra. Edición**, derecho de familia infancia y adolescencia Librería Ediciones del Profesional, **2014**.

La ley 1850 del 19 de julio de 2017 por la cual se establecen medidas de protección al adulto mayor, se modifican las leyes 1251 de 2008, 1315 de 2009, 599 del 2000, y 1276 del 2009, se penaliza el maltrato intrafamiliar por abandono y se dictan otras disposiciones - Colombia. Bogotá, Colombia.

Resolución No. 0652 de 2011 del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar- el estatuto del defensor de familia.

Monroy, M. (2012). Libro de derecho de familia, infancia y adolescencia. Librería ediciones del profesional LTDA.

Protocolo de San Salvador adiciona a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. [\\_](#) el 17 de noviembre de 1988, en el decimoctavo período ordinario de sesiones de la Asamblea General

Ruiz & Orozco- 2009 pg. 1-2